

Annex I


Public



**Cour
Pénale
Internationale**
**International
Criminal
Court**

Le Bureau du Procureur
The Office of the Prosecutor

Internal memorandum
Memorandum interne

To À	Judge Chile Eboe-Osuji, President Judge Robert Fremr, First Vice-President Judge Marc Perrin de Brichambaut, Second Vice-President	From De	Mrs Fatou Bensouda, Prosecutor 
Date	27 September 2018	Attachments	2 (copy of the original referral in Spanish and courtesy translation in English)
Ref.	OTP2018/025974	Copies	Mr Peter Lewis, Registrar
Subject Objet	Notification Referral from a group of six States Parties pursuant to article 14(1) of the Rome Statute regarding the situation in Venezuela		

In accordance with the provisions of regulation 45 of the Regulations of the Court, I hereby formally notify you that today, 27 September 2018, I received, from a group of six States Parties to the Rome Statute, namely Argentina, Canada, Colombia, Chile, Paraguay and Peru ("Group of six States Parties"), a referral under article 14(1) of the Rome Statute ("Statute"), regarding the situation in the Bolivarian Republic of Venezuela ("Venezuela").

As you will recall, I decided, on 8 February 2018, to open a preliminary examination of the situation in Venezuela to analyse crimes allegedly committed in this State Party since at least April 2017, in the context of demonstrations and related political unrest.

In its referral, the Group of six States Parties specifically requests the Prosecutor to initiate an investigation on crimes against humanity allegedly committed in the territory of Venezuela since 12 February 2014, with the view to determining whether one or more persons should be charged with the commission of such crimes.

Further to today's referral, the preliminary examination conducted by my Office will continue to follow its normal course, strictly guided by the requirements of the Statute.

For your ease of reference, I attach the referral dated 25 September 2018 that was hand-delivered by a delegation composed of Ambassadors of the referring States earlier today. A courtesy English translation of the original Spanish document is also provided for your convenience.

A statement publicly acknowledging the referral will be issued shortly as per the Office's existing practice. Should you require further information, my Office would be pleased to be of assistance. I

Nueva York, 25 de setiembre de 2018

A la Honorable señora Fiscal de la Corte Penal Internacional,

Tenemos el honor de dirigimos a usted en nombre y representación de los Gobiernos de la República Argentina, Canadá, la República de Colombia, la República de Chile, la República del Paraguay y la República del Perú, a fin de remitir para su investigación la situación relativa a crímenes de lesa humanidad de competencia de la Corte Penal Internacional (en adelante, la Corte o la CPI) que se habrían cometido en la República Bolivariana de Venezuela (en adelante, Venezuela) a partir del 12 de febrero de 2014, con vistas a determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas. Se realiza tal remisión al amparo de lo previsto en el artículo 14, numeral 1, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (en adelante, el Estatuto), hecho el 17 de julio de 1998 y vigente desde el 1 de julio de 2002, del cual Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú son también Estados Parte.

I Materia

La situación relativa a crímenes de lesa humanidad de competencia de la Corte, según están definidos en el artículo 7 del Estatuto, que se habrían cometido a partir del 12 de febrero de 2014 en Venezuela, Estado Parte del Estatuto desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2002.

A la Honorable señora
Fatou Bensouda
Fiscal de la Corte Penal Internacional
La Haya.-

II Los hechos

A mérito de lo que establece el artículo 14, numeral 2 del Estatuto, se detallan a continuación las circunstancias pertinentes que motivan la remisión de la mencionada situación de Venezuela a la Fiscalía de la Corte:

2.1 El 8 de febrero de 2018, la Fiscalía de la CPI dispuso que se abriera un "examen preliminar" para analizar si, al menos desde abril de 2017, se han cometido en Venezuela crímenes de competencia de la Corte en el marco de manifestaciones y de la inestabilidad política conexas. A tal efecto, la Fiscalía consideró la información que le fue proporcionada meses atrás por la Fiscal General destituida de Venezuela, señora Luisa Ortega.

2.2 Previamente, el 31 de diciembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el Informe titulado "Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela", en el que se resalta "la debilidad en la institucionalidad democrática y el deterioro progresivo de la situación de derechos humanos en Venezuela, las cuales se han profundizado e intensificado significativamente a partir del 2015 y de manera alarmante en el 2017" (párrafo 43).

2.3 El 29 de mayo de 2018, se presentó el "Informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y del Panel de Expertos Independientes sobre la Posible Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela" (en adelante, el Informe de la Secretaría General de la OEA). Tal documento consta de dos Partes: I Información recabada por la Secretaría General sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y II Análisis y Conclusiones del Panel de Expertos Internacionales Independientes para evaluar si la situación en Venezuela merece ser remitida a la Corte Penal Internacional.

El panel de expertos fue designado por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (en adelante, OEA) el 14 de septiembre de 2017 y estuvo integrado por el señor Manuel Ventura Robles (de Costa Rica, ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos); el señor Santiago Cantón (de Argentina, Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos); y el señor Irwin Cotler (de Canadá, presidente del Centro de Derechos Humanos Raúl Wallenberg, y ex ministro de Justicia y fiscal general de su país).

El Informe de la Secretaría General de la OEA pone de relieve que, a pesar de diversas solicitudes, no hubo posibilidad de acudir al territorio de Venezuela, pero que la información que sirve de sustento a aquel proviene, entre otras fuentes, de audiencias públicas realizadas en la sede de la organización en las que personas que habrían sido afectadas por la comisión de graves crímenes o sus familiares directos rindieron sus testimonios.

En el análisis del panel de expertos, figura una evaluación detallada en relación a cómo sí se habría configurado una situación de comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, a partir de ataques generalizados o sistemáticos contra una parte de la población civil de ese país constituida por la oposición al gobierno del Presidente Nicolás Maduro. Se explica pormenorizadamente la forma en que se habrían materializado diversos supuestos de crímenes de lesa humanidad, incluyendo en cada uno de dichos supuestos referencias sobre casos concretos que ejemplificarían la existencia de aquellos. Un aspecto particularmente dramático estaría dado por la realización de detenciones arbitrarias, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, abusos sexuales y violaciones, atentados flagrantes contra el debido proceso, en perjuicio de personas de ambos sexos, algunas de las cuales serían, incluso, menores de edad. Al mismo tiempo, se plantearía una acción sistemática contra varones jóvenes entre 15 y 30 años, a los que, sin justificación, se les detendría o llevaría fuera de sus casas para acusarlos de actos que no habrían cometido o asesinarlos aduciendo que opusieron resistencia.

Las acciones generales o sistemáticas se inscribirían en la existencia de planes de seguridad (como el denominado Zamora) diseñados por el gobierno del Presidente Nicolás Maduro y el involucramiento en aquellas no solo de fuerzas del orden del Estado, sino de organizaciones y grupos de personas afines al gobierno que no integran dichas fuerzas pero actúan de manera coordinada con estas como parte de una política de Estado contra la oposición.

Los crímenes de lesa humanidad que habrían sido objeto de constatación por el panel de expertos internacionales comprenden: (i) el asesinato; (ii) la encarcelación u otra privación grave de la libertad física; (iii) la tortura; (iv) la violación; (v) la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos; y (vi) la desaparición forzada de personas.

Un detalle especialmente relevante que consta en la Parte II del Informe es que la información recibida por el panel de expertos "es con relación a hechos ocurridos, por lo menos, a partir del 12 de febrero de 2014, fecha en la que se registran numerosos actos que forman parte del ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque." (página 262)

El panel de expertos recomienda finalmente que el Secretario General de la OEA: (i) remita el Informe y la evidencia recopilada por la Secretaría General a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, lo cual ya se ha hecho; e (ii) invite a los Estados Parte del Estatuto de Roma a que remitan la situación de Venezuela a la Fiscalía de la CPI, así como pidan a la Fiscal la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que se recogen en el Informe, de conformidad con el artículo 14 del Estatuto de Roma (página 389).

2.4 Por otro lado, en junio de 2018, se presentó el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) titulado "Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin."

El Informe resalta que el Gobierno de Venezuela no permitió que el ACNUDH tuviera acceso a su territorio, pero que sustenta las constataciones contenidas en aquel a través de ciento cincuenta (150) entrevistas con víctimas y testigos, al igual que con representantes de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos y universitarios. Según se resalta en el Resumen Ejecutivo,

"El Informe también documenta las violaciones de los derechos humanos que han cometido las autoridades estatales desde agosto de 2017, como el uso excesivo de la fuerza en operaciones de seguridad no relacionadas con las protestas, la práctica reiterada de las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos, y la vulneración de los derechos al disfrute del más alto nivel de salud y a una alimentación adecuada.

Además, el Informe documenta otras violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, cometidas por las autoridades estatales desde 2014." (sic, página ii)

Por último, atendiendo a que el Informe de la Secretaría General de la OEA, mencionado ut supra en el punto 2.3, ya ha sido entregado a la Fiscalía de la CPI, así como que en aquel se recomienda tanto su remisión por los Estados Parte del Estatuto como que se solicite la apertura de una investigación conforme al artículo 14 de dicho instrumento, se asume como documentación justificativa a la contenida en dicho Informe para los propósitos de lo señalado por el numeral 2 del mismo artículo 14 del Estatuto.

III La jurisdicción de la Corte

La jurisdicción de la CPI en relación con la materia que motiva la presente remisión estaría sustentada en los artículos 5, que detalla los crímenes de competencia de la Corte; 7, que define lo que se entiende por los crímenes de lesa humanidad; 11, numeral 1, y 12, numeral 2, literales a) y b), dado que Venezuela es Estado Parte del Estatuto desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2002 y los hechos a los que se hace referencia son desde el 12 de febrero de 2014; 13, literal a); y 14 del Estatuto de la Corte, atendiendo a que la República Argentina, Canadá, la República de Colombia, la República de Chile, la República del Paraguay y la República del Perú tienen igualmente la condición de Estados Parte de dicho instrumento internacional y actúan en virtud de ello al proceder de esta manera.

IV El fundamento legal


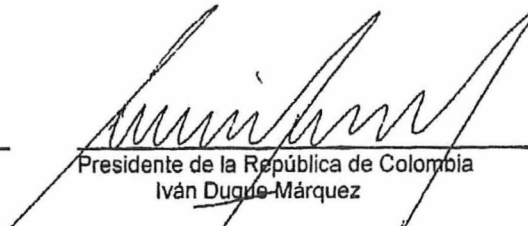

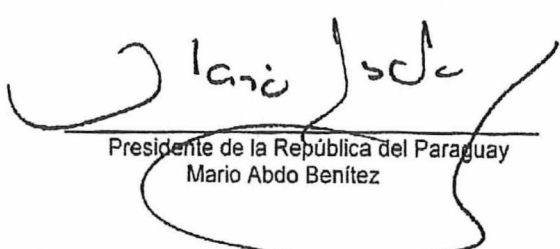

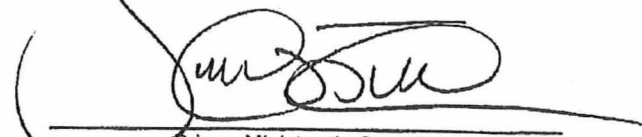
El fundamento legal para efectuar la presente remisión a la Fiscal de la CPI está dado por lo dispuesto en el artículo 14 del Estatuto, que faculta a un Estado Parte, como lo son la República Argentina, Canadá, la República de Colombia, la República de Chile, la República del Paraguay y la República del Perú, a remitir una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir que se investigue esa situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas.

V Decisión requerida

A mérito de lo expuesto y por las consideraciones señaladas, se solicita a la Fiscal de la Corte que, tras evaluar la información de que disponga conforme a lo previsto en el artículo 53 del Estatuto, inicie una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad que habría tenido lugar en Venezuela bajo el gobierno del Presidente Nicolás Maduro, a partir del 12 de febrero de 2014, con vistas a determinar si se ha de acusar por la comisión de tales crímenes a una o varias personas.

Todas las comunicaciones relativas a este asunto deberán ser enviadas a las Embajadas de la República Argentina, la República de Chile, la República de Colombia, la República del Paraguay y la República del Perú en el Reino de los Países Bajos.

Atentamente,

 _____ Presidente de la República Argentina Mauricio Macri	 _____ Presidente de la República de Colombia Iván Duque Márquez
 _____ Presidente de la República de Chile Sebastián Piñera Echenique	 _____ Presidente de la República del Paraguay Mario Abdo Benítez
 _____ Presidente de la República del Perú Martín Vizcarra Cornejo	
 _____ Primer Ministro de Canadá Justin Trudeau	

UNOFFICIAL TRANSLATION

New York, September 26, 2018

To the Honorable Prosecutor of the International Criminal Court,

We have the honor to address you on behalf of the Governments of the Republic of Argentina, Canada, the Republic of Colombia, the Republic of Chile, the Republic of Paraguay and the Republic of Peru, in order to refer for your investigation the situation relating to crimes against humanity under the jurisdiction of the International Criminal Court (hereinafter, the Court or the ICC) that would have been committed in the Bolivarian Republic of Venezuela (hereinafter, Venezuela) since February 12, 2014, for the purpose of determining whether one or more specific persons should be charged with the commission of such crimes. This referral is made under the provisions of article 14, paragraph 1, of the Rome Statute of the International Criminal Court (hereinafter, the Statute), made on July 17, 1998 and in force as of July 1, 2002, to which Argentina, Canada, Colombia, Chile, Paraguay and Peru are also States Parties.

I Subject

The situation regarding crimes against humanity under the jurisdiction of the Court, as defined in article 7 of the Statute, which would have been committed since February 12, 2014 in Venezuela, State Party to the Statute since its entry into force on July 1, 2002.

II Facts

In accordance with the provisions of article 14, paragraph 2 of the Statute, the relevant circumstances that motivate the referral of the aforementioned situation in Venezuela to the Office of the Prosecutor of the Court are detailed below:

To the Honorable Ms.
Fatou Bensouda
Prosecutor of the International Criminal Court
The Hague.-

UNOFFICIAL TRANSLATION

2.1 On February 8, 2018, Office of the Prosecutor of the ICC ordered that a "preliminary examination" be opened to analyze whether, since at least April 2017, crimes within the jurisdiction of the Court have been committed in Venezuela in the context of demonstrations and of the related political instability. To this end, the Office of the Prosecutor considered the information that was provided to it a few months prior by the deposed Attorney General of Venezuela, Ms. Luisa Ortega.

2.2 Previously, on December 31, 2017, the Inter-American Commission on Human Rights presented the report entitled "Democratic Institutions, the Rule of Law and Human Rights in Venezuela," which highlights "the weakness in democratic institutions and the progressive deterioration of the human rights situation in Venezuela, which have deepened and intensified significantly since 2015 and alarmingly in 2017 " (paragraph 43).

2.3 On May 29, 2018, the "Report of the General Secretariat of the Organization of American States and the Panel of Independent Experts on the Possible Commission of Crimes against Humanity in Venezuela" was presented (hereinafter, the Report of the General Secretariat of the OAS). This document consists of two Parts: I) Information collected by the General Secretariat on the possible commission of crimes against humanity in Venezuela and II) Analysis and Conclusions of the Panel of Independent International Experts to assess whether the situation in Venezuela merits referral to the International Criminal Court.

The panel of experts was appointed by the Secretary General of the Organization of American States (hereinafter, the OAS) on September 14, 2017 and was composed of Mr. Manuel Ventura Robles (of Costa Rica, former Judge of the Inter-American Court of Human rights); Mr. Santiago Cantón (from Argentina, Secretary of Human Rights of the Province of Buenos Aires and former Executive Secretary of the Inter-American Commission on Human Rights); and Mr. Irwin Cotler (from Canada, president of the Raoul Wallenberg Human Rights Center, and former Minister of Justice and Attorney General of his country).

The report of the General Secretariat of the OAS emphasizes that, despite various requests, there was no possibility of going to the territory of Venezuela, but that the information that serves as support for it comes from, among other sources, public hearings held at the headquarters of the organization, where people who claimed to have been affected by the commission of serious crimes or their immediate family members gave testimony.

The analysis of the panel of experts includes a detailed evaluation of how a situation of commission of crimes against humanity in Venezuela would have been configured, based on generalized or systematic attacks against a part of the civilian population of that country, constituted by the opposition to the government of President Nicolás Maduro. They give a detailed explanation of how various crimes against humanity would have occurred, including references to specific cases that would serve as examples. A particularly dramatic aspect are the alleged arbitrary detentions, murders, extrajudicial executions, torture, sexual abuse and rape, as well as flagrant attacks against due process, to the detriment of people of both sexes, including minors. At the same time, a systematic action would be carried out against young men between 15 and 30 years old, who, without justification, would be arrested or taken

UNOFFICIAL TRANSLATION

away from their homes to accuse them of acts they would not have committed, or to kill them on the grounds that they resisted.

The general or systematic actions would be part of security plans (such as the so-called Zamora Plan) designed by the government of President Nicolás Maduro, which involved not only of State security forces, but also of organizations and groups of people aligned with the government which, without being part of said forces, act in a coordinated manner with these as part of a State anti-opposition policy.

The crimes against humanity that would have been subject to verification by the panel of international experts include: (i) murder; (ii) imprisonment or other severe deprivation of physical liberty; (iii) torture; (iv) rape; (v) the persecution of an identifiable group or collectivity on political grounds; and (vi) the enforced disappearance of persons.

A particularly relevant detail included in Part II of the Report is that the information received by the panel of experts "is related to events that occurred, as of at least February 12, 2014, the date on which numerous acts were documented that are part of the generalized or systematic attacks against the civilian population and with knowledge of said attack" (page 262).

The panel of experts finally recommends that the OAS Secretary General: (i) forward the Report and the evidence gathered by the General Secretariat to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court, which has already been done; and (ii) invite the States Parties to the Rome Statute to refer the situation of Venezuela to the Office of the Prosecutor of the ICC, and ask the Prosecutor to open an investigation into the crimes against humanity that are collected in the report, in accordance with article 14 of the Rome Statute (page 389).

2.4 Furthermore, in June 2018, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) released a report entitled "Human Rights Violations in the Bolivarian Republic of Venezuela: a Downward Spiral with No End in Sight".

The report highlights that the Government of Venezuela did not allow OHCHR to have access to its territory, but that it supports the findings contained therein through one hundred and fifty (150) interviews with victims and witnesses, as well as representatives of civil society, journalists, lawyers, doctors and university students. As highlighted in the Executive Summary,

"The Report also documents the human rights violations committed by state authorities since August 2017, such as the excessive use of force in security operations unrelated to the protests, the repeated practice of arbitrary arrests, torture and ill-treatment, and the violation of the rights to enjoy the highest level of health and adequate food.

In addition, the Report documents other human rights violations, such as extrajudicial executions, arbitrary arrests, torture and ill-treatment, committed by state authorities since 2014" (sic, page ii).

UNOFFICIAL TRANSLATION

Finally, taking into account that the Report of the General Secretariat of the OAS, mentioned above in section 2.3, has already been submitted to the ICC Prosecutor's Office, as well as the fact that the report recommends both its referral by States Parties to the Statute, and that they request the opening of an investigation in accordance with article 14 of said instrument, for the purpose indicated in paragraph 2 of article 14 of the Statute, we consider as supporting documentation that contained in said report.

III Jurisdiction of the Court

The jurisdiction of the ICC in relation to the matter that motivates the present referral would be supported by articles 5, which details the crimes under the competence of the Court; 7, which defines what is meant by crimes against humanity; 11, paragraph 1; and 12, paragraph 2, subparagraphs a) and b), since Venezuela is a State Party to the Statute since its entry into force on July 1, 2002, and the facts referred to are as of February 12, 2014; 13, subparagraph a); and 14 of the Statute of the Court, taking into account that the Argentine Republic, Canada, the Republic of Colombia, the Republic of Chile, the Republic of Paraguay and the Republic of Peru also have the status of States Parties to said international instrument and act as such in proceeding in this manner.

IV Legal basis

The legal basis for making this referral to the Prosecutor of the ICC is given by the provisions of Article 14 of the Statute, which empowers a State Party, such as the Argentine Republic, Canada, the Republic of Colombia, the Republic of Chile, the Republic of Paraguay and the Republic of Peru, to refer a situation in which it appears that one or more crimes within the jurisdiction of the Court appear to have been committed and request the Prosecutor to investigate the situation for the purpose of determining whether one or more specific persons should be charged with the commission of such crimes.

V Decision required

To the merit of the foregoing and for the aforementioned considerations, the Prosecutor of the Court is requested, after evaluating the information available to her in accordance with the provisions of Article 53 of the Statute, to initiate an investigation into the commission of crimes against humanity that would have taken place in Venezuela under the government of President Nicolás Maduro, beginning on February 12, 2014, for the purpose of determining whether one or more specific persons should be charged with the commission of such crimes.

All communications regarding this matter should be sent to the Embassies of the Republic of Argentina, Canada, the Republic of Chile, the Republic of Colombia, the Republic of Paraguay and the Republic of Peru in the Kingdom of the Netherlands.

UNOFFICIAL TRANSLATION

Sincerely,

President of the Republic of Argentina
Mauricio Macri

Prime Minister of Canada
Justin Trudeau

President of the Republic of Colombia
Iván Duque Márquez

President of the Republic of Chile
Mario Abdo Benítez

President of the Republic of Paraguay
Sebastián Piñera Echenique

President of the Republic of Peru
Martín Vizcarra Cornejo